

La crisis de Nicaragua: la última etapa de una guerra permanente.

Por: Revista Correo. 21/06/2018

La campaña de intimidación paramilitar y terrorista mediático de Nicaragua ha provocado temor, inseguridad y dificultades en alrededor de 30 de los 153 municipios de Nicaragua. Solo el compromiso del Presidente Daniel Ortega con la paz ha evitado un conflicto aún peor. Casi tan perturbador como el extremo sadismo de los paramilitares de la oposición en Nicaragua es cómo sus partidarios y medios desplazan los crímenes de la oposición al atribuirlos al gobierno. El 14 de junio, la Comisión para la Verdad, Paz y Justicia de Nicaragua, juramentada por la Asamblea Nacional del país, informó que 168 personas murieron y más de 2100 resultaron heridas.

Sin asignar culpa, las cifras de la Comisión incluyeron 8 policías muertos con más de 200 heridos y también informaron de la aparición de torturas y secuestros entre los abusos. Hasta que la oposición extremista provocó la crisis actual, tales crímenes han sido desconocidos en Nicaragua desde la guerra de los años ochenta. Al igual que sus contrapartes en Venezuela, la oposición nicaragüense exhibe todas las características clásicas de los psicópatas. Los representantes políticos de la oposición están obsesionados con la imposición del control por la fuerza y ??la falta de voluntad para comprometerse. Los paramilitares de la oposición carecen de empatía y atacan con brutal sadismo. La marca de los medios de la oposición es el engaño implacable, insistente y cínico.

El sábado 16 de junio, 6 personas en Managua murieron en un incendio iniciado por paramilitares de la oposición. En otras partes de Managua, dos personas fueron asesinadas, una de ellas fue incendiada en la calle. Los representantes de la oposición, los partidarios y los medios atribuyen todas esas muertes a manos de sus paramilitares al gobierno. Como condición del diálogo nacional, la policía de Nicaragua se retiró a sus aposentos. Pero los paramilitares de la oposición los sitiaron en Masaya, Matagalpa, Jinotega, Mulukukú y otros lugares, matando e hiriendo a oficiales de policía mientras descaradamente acusaban a la policía de atacarlos.

En la noche del 13 de junio, el líder estudiantil sandinista Leonel Morales fue secuestrado por paramilitares de la oposición, torturado, fusilado y luego dejado por muerto en un cauce de drenaje. Fue encontrado apenas vivo y permanece en el hospital en cuidados intensivos. Morales participó en el diálogo nacional como líder electo del cuerpo estudiantil de UNEN en la universidad privada UPOLI, hasta hace poco una base para los paramilitares de la oposición y al menos una pandilla criminal aliada, cuyos líderes están ahora bajo arresto. El 15 de junio, la ministra de Salud, Sonia Castro, informó que 55 ambulancias habían sido dañadas o robadas, que numerosos centros de salud y hospitales habían sufrido daños y que 4 hospitales habían sido invadidos por bandas paramilitares de la oposición.

Incluso esos ataques y abusos, los medios de la oposición atribuyen al gobierno, junto con muchos ataques contra oficinas gubernamentales y municipales y docenas de asesinatos de paramilitares de la oposición. De manera similar, en contraste con la presentación de la Comisión Nicaragüense de la Verdad del 14 de junio incomparablemente más profesional, el comunicado del 13 de junio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó el falso testimonio sistemático de las organizaciones de derechos humanos de la oposición. El comunicado de la CIDH evitó toda condena de los paramilitares de la oposición y acusó agresivamente al gobierno de la mayor parte de la violencia.

Por su parte, el gobierno nicaragüense condenó enérgicamente el comunicado de la CIDH como “sesgado, parcializado y carente de objetividad al señalar al Estado por hechos que no ha cometido, faltando a la veracidad”. Los horribles incidentes de la mañana del 16 de junio serán una prueba real de la veracidad de la CIDH. Las víctimas eran todos simpatizantes sandinistas, mientras que los atacantes eran claramente paramilitares de la oposición y delincuentes asociados. Si la CIDH recicla las falsedades de la oposición de que los crímenes fueron cometidos por partidarios del gobierno, socavarán en gran medida la confianza no solo en la CIDH, sino también en la misión más amplia de asesoramiento y acompañamiento de la Organización de Estados Americanos.

A pesar de todo, el diálogo nacional avanzó el 15 de junio cuando el gobierno volvió a confirmar su disposición a recibir misiones internacionales para ayudar a resolver la crisis política del país. Después de muchas obstrucciones, la oposición y los obispos que median, tal vez influenciados por la presencia del nuevo emisario del Vaticano en Nicaragua, finalmente aceptaron la insistencia del gobierno en un

acuerdo para eliminar los tranques que paralizan la economía de Nicaragua. Pero casi de inmediato, en la noche del 15, la oposición celebró una conferencia de prensa en la que negaron que se eliminen los tranques. En la mañana del 16 llegaron los terribles ataques terroristas en Managua. Ambos eventos estaban claramente con la intención de sabotear el diálogo nacional. Aun así, en la tarde del día 16, se llegó a un acuerdo sobre la agenda de discusión para comenzar el 18 de junio con posibles cambios electorales y judiciales.

La oposición probablemente demorará el desmantelamiento de las barricadas y continuará con sus ataques terroristas para extorsionar las máximas concesiones del gobierno. Pero los extremistas de la oposición también esperan provocar el uso de las fuerzas de seguridad para despejar los obstáculos, matar el diálogo nacional y ofrecer un pretexto para la condena internacional o algún tipo de intervención. Esto sigue el modelo de la volátil oposición controlada por Estados Unidos en Venezuela. Mientras algunos observadores sugieren que el gobierno de los Estados Unidos no quiere que Nicaragua colapse, por temor a una mayor migración a los Estados Unidos y un aumento del crimen organizado, pocos creen que las élites de poder y su gobierno se preocupen por el bienestar de las personas en Centroamérica.

Ningún factor único explica lo que está sucediendo en Nicaragua, donde un caleidoscopio cambiante de intereses hace que los eventos sean confusos e impredecibles. Mientras el gobierno sandinista negocia de buena fe, la visita del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores del Senado Bob Corker el 11 de junio a Managua ofreció otro ejemplo de las divisiones entre los principales republicanos estadounidenses, la administración errática de Trump y la siniestra mafia anticubana de Estados Unidos apoyando a los extremistas de la oposición nicaragüense. Nicaragua tiene fuertes relaciones con Japón, Taiwán y Corea del Sur, cuyas comunidades de negocios probablemente estén presionando contra la desestabilización de Nicaragua. Las naciones del Caribe en la OEA probablemente también están defendiendo a Nicaragua, al igual que la mayoría de ellos han defendido a Cuba y Venezuela.

Dado que la oposición nicaragüense está tan dividida como sus contrapartes de la oposición venezolana, puede ser conveniente para las élites de los EE. UU. no presionar por un cambio de régimen difícil de lograr e impredecible en sus consecuencias. Los aliados nicaragüenses de las élites estadounidenses provocaron la crisis actual porque fracasaron electoralmente. Al insistir en una solución política en lugar de desplegar las fuerzas de seguridad del país, el gobierno Sandinista

probablemente ha logrado mantener intactas las más recientes lealtades electorales estructurales de Nicaragua, donde alrededor del 50% apoya al FSLN, 30% -35% apoya a la oposición y 15% -20% son independientes. La oposición necesita todos los votos independientes para ganar la Presidencia o una mayoría en la legislatura, teóricamente posible pero poco probable.

El diálogo nacional está discutiendo el avance de las elecciones programadas para 2021 y factores externos como las sanciones de Estados Unidos o la intervención de la OEA inclinarán la política electoral de Nicaragua a favor de la oposición. Pero la crisis puede ser contraproducente para la oposición en términos electorales, dependiendo de cuán susceptibles sean las personas a la constante guerra psicológica. La oposición no tiene un candidato viable ni tiene ninguna propuesta de política social, mientras que sus propuestas económicas han sido banales, egoístas y neoliberales. Por lo tanto, la oposición puede optar por las elecciones a fines de 2019 o principios de 2020, dando a las élites estadounidenses el tiempo para crear las condiciones electorales necesarias para una victoria de la oposición.

Otro factor obviamente importante en los cálculos electorales es la seguridad y el crimen organizado. En el futuro previsible, la oposición extremista continuará con una política de ataques provocativos e intimidación, creando incertidumbre e inseguridad que pueden moldear las intenciones electorales de maneras impredecibles. La política de seguridad para contrarrestar el crimen organizado y la violencia terrorista de la oposición debería funcionar a favor del gobierno porque la gente quiere paz y estabilidad. Más fundamentalmente, el gobierno se centrará en la productividad interna y garantizará la seguridad alimentaria para contrarrestar las consecuencias económicas de la crisis, como un mayor desempleo, más migración, menor inversión, fuga de capitales y mayores costos empresariales como resultado de la crisis.

El gobierno también tratará de modelar los patrones de consumo e inversión a fin de evitar una crisis de la balanza de pagos perjudicial que obligue al recurrir al Fondo Monetario Internacional. Otra intención obvia de la crisis instigada por Estados Unidos ha sido atacar la economía popular y la capacidad del gobierno para mantener los subsidios. Los recortes en los actuales subsidios a la electricidad y el transporte para las familias de bajos ingresos disminuirían seriamente el valor de los aumentos anuales del salario mínimo desde 2007. Lo mismo se aplica a los programas sociales, la atención médica y la educación, todas políticas exitosas del gobierno. Todos estos factores afectarán cualquier resultado electoral.

La actual crisis en Nicaragua es una intensa escalada de la estrategia estadounidense y aliada a largo plazo para destruir el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un componente importante del implacable asalto regional contra Cuba y Venezuela. La derrota de las élites estadounidenses en Eurasia los obliga a consolidar el control en las Américas y evitar un canal nicaragüense controlado por China, así como a contrarrestar la influencia rusa. Las élites estadounidenses también quieren aplastar la economía popular redistributiva de carácter socialista y económicamente exitosa de Nicaragua y su política regional integracionista que amenaza el control de los Estados Unidos.

El fracaso de las élites de poder de Estados Unidos en derrocar al gobierno de Venezuela ha hecho que cambiar o debilitar el gobierno Sandinista de Nicaragua sea más urgente. El cambio de régimen en Nicaragua también eliminaría su obstrucción de los objetivos globales de la política exterior de los EE. UU. y de los aliados en relación con, por ejemplo, Venezuela y Cuba o Palestina e Irán. El intento de golpe actual en Nicaragua no es meramente un evento político a corto plazo, sino más bien una intensificación de la guerra permanente de las élites estadounidenses sobre la mayoría empobrecida en América Latina. La prioridad inmediata para el gobierno Sandinista de Nicaragua es evitar el conflicto armado, lograr un acuerdo pacífico y perdurar.

[LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ.](#)

Fotografía: Revista Correo

Fecha de creación

2018/06/21